

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE	MÓNICA RAFAL VILLEGAS
DEMANDADO	COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
RADICADO	76001-31-05-005-2021-00045-01
TEMAS Y SUBTEMAS	COMPETENCIA, FACTOR TERRITORIAL
DECISIÓN	REVOCA

AUTO INTERLOCUTORIO No.141

Santiago de Cali, cinco (05) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N° 010 de 2022, se procede a decidir el recurso de apelación presentado por la apoderada de **PORVENIR S.A.** contra del Auto No. 623 del 10 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, dentro del proceso promovido por la señora **MÓNICA RAFAL VILLEGAS** contra **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**

ANTECEDENTES

A través de demanda ordinaria laboral, la señora **MÓNICA RAFAL VILLEGAS** deprecó la declaratoria de nulidad de su traslado desde el RPMPD al RAIS, y, en consecuencia, se ordene tenerla como afiliada a **COLPENSIONES**, y que **PORVENIR S.A.** traslade a la primera la totalidad del ahorro efectuado, entre lo que se destaca aportes y rendimientos.

Notificadas las integrantes del extremo pasivo, ambas procedieron a contestar la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones (f. 3 a 14 Archivo 12 ED y f. 2 a 23 Archivo 14 ED).

Dentro de sus argumentos de defensa, La **AFP PORVENIR S.A.** formuló la excepción previa de “falta de competencia”, soportada en que, a través de su apoderada, la demandante radicó la reclamación administrativa ante **COLPENSIONES**, en la ciudad de Palmira – Valle del Cauca, cuya respuesta fue también dirigida a ese lugar, por lo que el Despacho de primera instancia no era competente para conocer del asunto (f. 20 Archivo 14 Ed).

Posteriormente, en audiencia de que trata el artículo 77 CPLSS, en la etapa pertinente, a través del Auto No. 623 del 10 de marzo de 2022, la Juzgadora de conocimiento negó la falta de competencia alegada por la AFP, tras argüir, primero, que conforme el artículo 6°

CPLSS, el requisito de la reclamación previa se solicita respecto de entidades como **COLPENSIONES**, y no de **PORVENIR S.A.**, frente a la cual no debe agotarse esta solicitud.

En ese sentido, adujo que, al revisar el expediente la actora presentó reclamación a **COLPENSIONES** el 10 de diciembre de 2020, y posteriormente presentó una nueva el 13 de septiembre de 2021 en la ciudad de Cali, conforme la documental aportada al Juzgado. Así mismo, advirtió que también presentó reclamación a **PORVENIR S.A.** en la misma fecha en la sede regional sur. En ese sentido, expuso que, si bien era cierto que la demanda fue presentada en febrero de 2021, esto es, previo a elevar la reclamación ante **COLPENSIONES** en Cali, resultaba cierto que con este reclamo subsanó la falencia referida por la demandada, la cual por demás es saneable según lo dicho en Sentencia del 24 de septiembre de 2014 Rad. 45819 de la Sala de Casación Laboral de la CSJ.

Por último, expuso que al tenor de los poderes otorgados en el artículo 48 CPLSS, debía adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el respeto de los derechos y las garantías fundamentales, así como el equilibrio entre las partes, considerando igualmente que el artículo 11 CPLSS permite a la actora elegir entre el domicilio de la entidad y el lugar de presentación de la reclamación, y en ese orden, el querer de la parte es que fuera la ciudad de Cali (Audio Archivo 14 ED).

### **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con la anterior determinación la apoderada judicial de la demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, manifestando similares razones a las esbozadas a la hora plantear la excepción, estas son, que dentro de la documental arrojada al expediente se observa que mediante apoderada la demandante presentó reclamación administrativa en la ciudad de Palmira, el día 10 de diciembre de 2020, recibiendo respuesta allí mismo al día siguiente. Así mismo, realizó la reclamación ante **PORVENIR** en la ciudad de Bogotá el 11 de diciembre de 2020, por lo que reitera no es el Juzgado de primer grado competente para conocer del asunto (Audio Archivo 26 ED).

En respuesta a lo anterior, anotó la Juzgadora no tener hechos nuevos para reconsiderar su postura, concediendo la apelación propuesta (f. 1 a 2 Archivo 27 ED).

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Mediante auto del 11 de mayo de 2022, se dispuso el traslado para alegatos a las partes, habiendo presentado los mismos en término los apoderados de Colpensiones, parte demandante y Porvenir, como se advierte en los archivos 04 a 06 del expediente digital, y a los cuales se da respuesta en el contexto de la providencia.

### **PROBLEMA (S) A RESOLVER**

El problema jurídico se centra en establecer si es improcedente declarar la falta de competencia para conocer del presente asunto, como lo definió el Juzgado de primera instancia, o, por el contrario, le asiste razón a la recurrente en que este no es competente para dirimir el asunto.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 3° del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que decida sobre excepciones previas es susceptible del

recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

De acuerdo con los argumentos de la alzada, de entrada, la Sala anota que no comparte los argumentos utilizados por la Juez de primer grado para cimentar su decisión, a fin de concluir su competencia para decidir el presente asunto.

Fluye en ese sentido, debiendo recordar de antemano que, en el particular, el extremo demandado en el presente proceso lo integran varias entidades, como son, **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**, todas pertenecientes al Sistema de Seguridad Social. Por consiguiente, al haber pluralidad de accionados, es dable acudir a lo señalado en el artículo 14 ibidem, el cual dispone que: “(...) Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos o más personas, y, por tanto, tengan competencia para conocer de ella dos o más Jueces, el actor elegirá entre éstos. (...)”.

Bajo esa idea, teniendo en cuenta la condición de las demandadas, entra a ser relevante el contenido del artículo 11 CPLSS, anotado como mal interpretado por la recurrente, que reza:

*“(...) En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral, será competente el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a elección del demandante.* (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).

Nótese entonces que, las disposiciones en cita consagran la opción que tiene el DEMANDANTE sobre el lugar para interponer la respectiva demanda, y en el caso que su elección se ajuste a las reglas previstas en la legislación adjetiva del trabajo, en manera alguna el Juzgador, o la contraparte, basada en consideraciones propias, están legitimados para sustituir la voluntad de quien ha ejercido la acción.

En esos términos lo ha dejado claro la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, puntualmente en el Auto AL1212-2021, providencia en la que anotó:

*“(...) En ese orden, existe pluralidad de jueces competentes, por lo que se debe atender a lo normado por el artículo 14 ídem, que preceptúa: «Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos o más personas, y, por tanto, tengan competencia para conocer de ella dos o más Jueces, el actor elegirá entre éstos». De ahí que, al ser las convocadas entidades pertenecientes al Sistema de Seguridad Social Integral, la competencia resulta a elección del demandante, pues es claro que la norma aplicable es el artículo 11 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (...)*

*(...)*

*De ahí que al hacer uso del derecho que le otorga la disposición reproducida en precedencia, la actora si bien no lo expresó con claridad en el escrito inaugural; cuando presentó su demanda ante el Juzgado Laboral del Circuito de Medellín -Reparto-, es claro que optó por el lugar donde surtió la reclamación del derecho pretendido, así lo precisó en los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de reposición contra el proveído de 18 de julio de 2018, en donde ratificó la elección de esa ciudad (por ser el lugar donde se presentó la reclamación administrativa), en ejercicio de su fuero electivo.* (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).

Puestas de ese modo las cosas, en el asunto en cuestión se observa, de los documentos adosados junto al escrito de demanda, que la actora radicó la reclamación administrativa ante **COLPENSIONES** con miras a obtener lo pretendido más adelante en sede judicial, **en la**

**ciudad de Palmira** (f. 2 Archivo 04 ED), así como la solicitud elevada a **PORVENIR S.A.**, remitido por correo certificado hasta la ciudad de Bogotá (f. 7 a 9 Archivo 04 ED), situación que, de acuerdo con la reglamentación legal descrita, daría lugar a concluir, como lo señaló la apelante, que el Juez Laboral del Circuito de estas localidades tendría competencia para decidir el presente proceso, por encima del Juzgado de primera instancia.

De igual forma, resulta válido anotar que, **después de presentada la demanda**, en el mes de septiembre de 2021, la accionante a través de su apoderada **radicó en la ciudad de CALI** nuevas reclamaciones tanto a **COLPENSIONES** como a **PORVENIR S.A.**, la que fuere resuelta de manera negativa por lo menos por la primera de las entidades demandadas (f. 189 y 211 a 212 Archivo 13 ED y f. 7 a 9 Archivo 23 ED).

Resáltese entonces que el contraste de las circunstancias descritas y lo estipulado en el ordenamiento legal, denotan cierto desconocimiento de los parámetros procesales en materia de reclamación administrativa de cara a los efectos definitorios de competencia (Art. 6 y 11 CPLSS), pues nótese no más que el reclamo inicialmente formulado a las demandadas se hizo en ciudades distintas (Palmira y Bogotá), para después, inadvertidos tales presupuestos, proceder a interponer la solicitud en una tercera ciudad como Cali, aspecto al que se aúna que ni siquiera en la demanda esboza alguna razón del porque se concentraba, a juicio del extremo activo, la competencia para definir esta controversia por un Juez Laboral del Circuito de esta ciudad.

Puestas de esa manera las cosas, en esta oportunidad la Colegiatura no puede acompañar la tesis planteada por el Despacho, pues salta de bulto la trasgresión a la normativa procesal respecto de las reglas para establecer la competencia dentro de ámbito de conocimiento de los Jueces del Trabajo, cuestión que, se reitera, si bien está revestida del fuero electivo del demandante para presentar su reclamo judicial en la sede del domicilio principal de la accionada o el lugar donde radicó la reclamación administrativa, no es dable que de manera subjetiva disponga demandar en otro lugar, con el agravante de querer subsanar su posible falencia presentando en la ciudad donde incoó la demanda, una nueva reclamación, circunstancia que, debe recordarse, por la misma profilaxis procesal es necesario que esté determinada al momento de la presentación de la demanda (Art. 11 CPLSS), y no en una oportunidad posterior, cuando el trámite judicial se encuentre en curso, en tanto, pasaría por encima del mismo espectro territorial de competencia fijado por el legislador en esta clase de asuntos.

Frente a esta situación, la Sala llama la atención de los profesionales del derecho como conocedores de la normativa, y en especial de los Jueces, quienes son los obligados a ejecutar el control de la demanda con la que se pretende iniciar determinado proceso judicial, **de manera rigurosa** pues con omisiones como las que se destacan en este asunto, generan un perjuicio a la administración de justicia reflejado en la congestión del sistema, y peor aún, a los mismos usuarios dada la pérdida de tiempo a la que resultan sometidos (AL2080-2021).

Aunado a ello, tampoco acierta la Juez al sustentar su postura en la posibilidad de entender saneada la falencia evidenciada, como quiera que, según la Jurisprudencia, esto solo ocurre en aquellos casos en donde no existió reclamación administrativa y la entidad no interpuso el alegato respectivo en la oportunidad procesal previamente establecida en la Ley, esto es, a través de la respectiva excepción previa (SL2872-2021 y SL2150-2021), lo cual no ocurrió en el particular, como quiera que además de haber efectuado varias reclamaciones, ocurrió que la parte pasiva si propuso el exceptivo pertinente.

En consecuencia, habrá de revocarse la decisión inicial, para en su lugar, declarar probada la excepción previa de falta de competencia, disponiéndose la remisión del expediente a la oficina de apoyo judicial de Palmira, lugar en donde se radicó la reclamación inicial a **COLPENSIONES**, y que a su vez reporta mayor cercanía a su domicilio y el de su apoderada, para que sea repartido entre los Jueces Laborales de dicho Circuito. Sin costas en esta instancia.

Oficiése por Secretaría al Juzgado de primera instancia informando lo decidido en el presente proveído.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA PRIMERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI**,

### RESUELVE

**PRIMERO: REVOCAR** el Auto No. 623 del 10 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, para en su lugar, **DECLARAR** probada la excepción previa de falta de competencia, y, en consecuencia, se **DISPONE** remitir el expediente del actual proceso con destino a la oficina de apoyo judicial de Palmira, para que sea repartido entre los Jueces Laborales de dicho Circuito

**SEGUNDO:** Sin **COSTAS** en esta instancia. Oficiése por Secretaría al Juzgado de primera instancia informando lo decidido en el presente proveído.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

**MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**

SE SUSCRIBE CON FIRMA ELECTRONICA  
Ley 527 de 1999, artículo 7°. Decreto 2364 de 2012

Firma digitalizada para  
actos judiciales  
**FABIO HERNAN BASTIDAS VILLOTA**  
**FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA**

**CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA**  
**SALVO VOTO**



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI  
**SALA 1ª DE DECISIÓN LABORAL**  
Magistrado Ponente: **DRA MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**

### **SALVAMENTO DE VOTO**

Con estribo de la sentencia **SL 1219 de 2021**, se afirma no existir causal de nulidad en el presente caso:

**D: 727312**

**NÚMERO DE PROCESO: 86493**

**NÚMERO DE PROVIDENCIA: SL1219-2021**

**CLASE DE ACTUACIÓN: ACCIÓN DE REVISIÓN**

**TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA**

**FECHA: 03/03/2021**

**PONENTE: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**

1.1. De la jurisdicción y competencia

Al respecto, esta Sala tiene adoctrinado que el debido proceso comprende toda una gama de garantías que permiten el acceso a la administración de justicia y la producción de decisiones judiciales de manera oportuna y eficiente, y sobre todo garantizan la realización del principio de legalidad. De ahí el contenido del artículo 29 Superior, según el cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

En suma, el debido proceso incluye la garantía de juez natural, el respeto a un procedimiento previamente definido por el legislador y la oportunidad de la respuesta judicial.

Así, dentro de las prerrogativas incorporadas en el debido proceso se encuentra la relativa a que determinado asunto lo resuelva el juez facultado por la ley para ese fin, lo que, a su vez, asegura una tutela jurídica efectiva y que cada actuación surtida en el proceso quede revestida de validez.

Lo anterior, corresponde al desarrollo del concepto de jurisdicción, vista como la facultad estatal de decidir los conflictos que surgen entre las personas, y de la cual gozan los jueces de la República. Su ausencia impide el ejercicio de cualquier actividad procesal y, por tanto, las decisiones adoptadas con tal vacío quedan viciadas de una nulidad insanable (CSJ SL, 22 abr. 2008, rad. 30517).

En tal panorama, el ordenamiento constitucional colombiano consagra distintas jurisdicciones, entre otras, la ordinaria y el contencioso administrativo. La primera, a su vez, posee diferentes especialidades, entre las que se encuentra la laboral y de la seguridad social, cuyas competencias se definieron en el artículo 2.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En ese orden, puede hablarse de falta de jurisdicción, cuando, por ejemplo, un juez laboral asume el conocimiento de un proceso que por su naturaleza corresponde al juez administrativo, supuesto que, precisamente es el que alega la entidad accionante.

En tal contexto, se tiene que el 21 de julio de 2016, Doralice Herrera Sánchez presentó demanda ordinaria para obtener el pago de una pensión de sobrevivientes (f.º 605), la cual se notificó a la UGPP el 17 de septiembre de 2016 (f.º 610). Para ese entonces, ya se encontraba vigente el numeral 4.º del citado artículo 2.º, modificado por la Ley 712 de 2001, que le otorga la competencia a la jurisdicción ordinaria para conocer los conflictos derivados del sistema integral de seguridad social, sin que importe la naturaleza de la relación jurídica, ni de los actos jurídicos controvertidos.

Entonces, como la pensión de sobrevivientes corresponde a una prestación económica derivada del sistema integral de seguridad social, la competencia para su conocimiento esta asignada a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Por ello, el planteo de la actora carece de vocación de prosperidad.

El Magistrado,



**CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA**

Firmado Por:  
**Maria Nancy Garcia Garcia**  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 010 Laboral  
Tribunal Superior De Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **13ed76dd992f0cbdd7bd91f6078e7cea69d55bdf25cf531454d508ca600b5a60**

Documento generado en 05/08/2022 04:02:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>